

RESOLUCIÓN No.

18 OCT. 2022

Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE - En uso de sus atribuciones legales y, en especial, las señaladas en la Ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES.

Que Mediante Resolución N° 779 del 27 de septiembre de 2004, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique, requiere al municipio de Turbaco para que dé cumplimiento a la Gestión de Residuos Sólidos.

Que por medio de Resolución No 0109 del 7 de febrero de 2011, esta Corporación requirió al municipio de Turbaco a fin de que implementara el comparendo ambiental.

Que mediante Resolución No 0905 del 13 de agosto de 2012, Cardique requirió al municipio de Turbaco, para que ponga en ejecución los proyectos contentivos del PGIRS, así mismo actualice o modifique el PGIRS, conforme lo establece el artículo 11 de la resolución No 1045 de 2005, para lo cual un término de 45 días hábiles e implemente el comparendo ambiental.

Que mediante No 0696 del 8 de mayo de 2015, esta Corporación requirió al municipio Turbaco. Bolívar para que aumente la cobertura de recolección, garantizar las frecuencias mínimas requeridas y fijar horarios de recolección que garanticen la prestación del servicio de aseo a toda la población de manera eficiente.

Que mediante Resolución No 163 del 22 de febrero de 2016, esta Corporación requiere al municipio de Municipio de Turbaco, para que de manera inmediata implemente todos los proyectos contemplados en el PGIRS, que a la fecha han debido ser ejecutados, entre ellos, los relacionados con el componente de aprovechamiento; implemente todas las acciones a que haya lugar que conlleven a mejorar la prestación de aseo; definir e implementar alternativas para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el aseo entre otras.

DEL AUTO DE INICIO

Que mediante resolución No 160 del 9 de febrero de 2017, se Inició Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del Municipio de Turbaco- Bolívar, por el incumplimiento en las obligaciones establecidas en las resoluciones No 0905 de 2012, resolución 0396 de 2015 y resolución No 0163 de 2016, resolución que se notificó mediante aviso 1406 del 24 de abril de 2017.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante visita de control y seguimiento emitió concepto técnico No 0948 de 2017 en el cual se concluyó:

Pese a contar con prestación de servicio de aseo y que se han adelantado acciones de limpieza en los puntos utilizados como sitios de disposición inadecuada de residuos, aun se evidencian en el municipio de Turbaco botaderos satelitales que generan afectación ambiental en este municipio.

El municipio de Turbaco sigue sin dar cumplimiento a los requerimientos realizados por Cardique mediante las Resoluciones N° 0905 de 2012, N° 0163 de 2016 y N° 0160 de 2017, expedidas por Cardique, así como tampoco ha cumplido con lo establecido en la Ley 1259 de 2008 y decreto reglamentario 3695 de 2009, referentes al Comparendo Ambiental por lo que se recomienda dar continuidad al proceso sancionatorio ambiental indiciado por Cardique.

RESOLUCIÓN No.

18 OCT. 2022

Nº - 1495

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.**

Se reiteran las obligaciones establecidas en las Resoluciones N° 0905 de 2012, N° 0163 de 2016 y N° 0160 de 2017.

DEL AUTO DE FORMULACION DE CARGO Y DESCARGO

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique mediante Resolución 1083 del 24 de agosto de 2018, formulo pliego de cargos en contra del Municipio de Turbaco, Representado Legalmente por el señor Víctor Julio Alcalá o quien haga sus veces de la siguiente manera:

Cargo Único: incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 2 de la Resolución No 0905 del 13 de agosto de 2012, Resolución No 0696 del 8 de mayo de 2015 y resolución No 163 del 9 de febrero de 2016, que a continuación se desprenden:

1.1. *Actualizar o modificar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución número 1045 de septiembre 26 de 2003, el cual debe guardar armonía y coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal en un término de cuarenta y cinco días hábiles, infringiendo el artículo 2.3.2.5.118 del Decreto 1076 de 2015 en numera 3º.*

1.2. *Implementar todos los proyectos contemplados en el PGIRS, que a la fecha han debido ser ejecutados, entre ellos, los relacionados con el componente de aprovechamiento, implementar todas las acciones a que haya lugar que conlleven a mejorar la prestación de aseo; definir e Implementar alternativas para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el aseo.*

1.3. *Clausurar de manera inmediata de los botaderos ubicados en los diferentes sitios de la cabecera municipal zonas rurales y disponer de estos residuos en un relleno sanitario que tenga licencia ambiental infringiendo el artículo 79 de la C.N y el art 2.3.2. 3.5.15 y ss. del Decreto 1077 de 2015.*

Que vencido el termino para la presentación del descargo, el Municipio de Turbaco, no allego escrito referente alguno y tampoco solicito prácticas de pruebas. Por consiguiente, esta Corporación no considero necesario surtir el termino probatorio

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique mediante Auto 0606 del 19 de diciembre de 2018 corrió traslado para alegar de conclusión dentro del proceso sancionador ambiental que se surte en contra del Municipio de Turbaco Departamento de Bolívar.

Que vencido el termino para la presentación del alegato, el Municipio de Turbaco, no allego escrito referente alguno. Por consiguiente, esta Corporación no considero necesario surtir el termino probatorio.

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique mediante Auto 0205 del 9 de mayo de 2019, se declaró surtida la etapa de alegatos dentro del proceso sancionador ambiental que se surte en contra del Municipio de Turbaco Departamento de Bolívar.

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique, profirió el concepto técnico número 053 de 2021

RESOLUCIÓN No.

Nº - 1495

18 OCT. 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

2. CONSIDERACIONES JURIDICAS

2.1. CARGOS IMPUTADOS:

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique mediante Resolución 1083 del 24 de agosto de 2018, formulo pliego de cargos en contra del Municipio de Turbaco, Representado Legalmente por el señor Víctor Julio Alcalá o quien haga sus veces de la siguiente manera:

Cargo Único: incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 2 de la Resolución No 0905 del 13 de agosto de 2012. Resolución No 0696 del 8 de mayo de 2015 y resolución No 163 del 9 de febrero de 2016, que a continuación se desprenden:

- 1.1. Actualizar o modificar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución número 1045 de septiembre 26 de 2003, el cual debe guardar armonía y coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal en un término de cuarenta y cinco días hábiles, infringiendo el artículo 2.3.2.5.118 del Decreto 1076 de 2015 en numera 3^o.
- 1.2. Implementar todos los proyectos contemplados en el PGIRS, que a la fecha han debido ser ejecutados, entre ellos, los relacionados con el componente de aprovechamiento, implementar todas las acciones a que haya lugar que conlleven a mejorar la prestación de aseo; definir e Implementar alternativas para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el aseo.
- 1.3. Clausurar de manera inmediata de los botaderos ubicados en los diferentes sitios de la cabecera municipal zonas rurales y disponer de estos residuos en un relleno sanitario que tenga licencia ambiental infringiendo el artículo 79 de la C.N y el art 2.3.2. 3.5.15 y ss. del Decreto 1077 de 2015.

No se presentaron Descargos por parte del Municipio de Turbaco, Departamento de Bolívar

3. FINALIDAD, SUJECCIÓN LEGAL Y PROPORCIONALIDAD

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, se refirieron a la materia y a los mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha denominado la llamada "Constitución Ecológica"; pero la jurisprudencia ha destacado el contenido de los Artículos 8°, 49, 79 y 80¹, por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia en materia ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano² y el deber del Estado de proteger la diversidad la integridad del ambiente, conservar las áreas de importancia ecológicas y fomentar la educación para el logro de estos fines.

¹ Corte Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

² A pesar de que la consagración constitucional de este derecho se dio a partir de 1991, ya el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Art. 70 Decreto - Ley 2811 de 1974) lo consagraba como derecho de orden legal.

Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No 16-190

Tels. 669 5278 - 669 4666 - 66 94141

www.cardique.gov.co

Cartagena de Indias D.T. y C. - Colombia

RESOLUCIÓN No.

(18 OCT) 2022

Nº - 1495

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.**

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

Dentro de los principales desarrollos legales adoptados por el Estado Colombiano para cumplirlos preceptos constitucionales en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales mencionados, se encuentra la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó el Sistema Nacional Ambiental - SINA.

Por su parte, según la Corte Constitucional³, la potestad sancionatoria en materia ambiental hace parte del derecho correccional y del *ius puniendi* del Estado y que, por lo tanto, los principios del derecho penal se aplican en todo el derecho sancionador del Estado, tal como, a su juicio, se desprende de la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que *transcribe, lo que hace obligatorio que, "en virtud del derecho fundamental al debido proceso y de la protección del derecho fundamental de libertad y de otros derechos fundamentales del individuo, que en el derecho administrativo ambiental, como emanación del ius puniendi del Estado, se apliquen los principios generales del derecho penal, entre los cuales se encuentran (...) el principio de legalidad de las sanciones y sus subprincipios de tipicidad y taxatividad"*.

Se refiere luego al principio de legalidad de las sanciones y a los mencionados subprincipios que derivan del artículo 29 de la Carta cuando establece que *"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa"* e indica que del principio de legalidad se infiere que las penas y, en general, las sanciones que el Estado puede imponer a los particulares, deben ser taxativas, pues la ley no puede hacer una previsión genérica de las medidas sancionatorias que puede utilizar el Estado frente a cualquier tipo de infracción, sino que debe establecer caso por caso, supuesto por supuesto, qué tipo de sanción y en qué medida debe proceder ante cada uno de los supuestos de infracción de la ley.

La potestad que le otorga la Constitución Política al Estado en materia sancionatoria se encuentra limitada por las mismas disposiciones del orden superior que así lo determinan. Dichas restricciones son básicamente el derecho al debido proceso, a la contradicción, a la defensa, a la presunción de inocencia, la proscripción general de establecer regímenes de responsabilidad objetiva y la imposibilidad de trasladar la carga de la prueba al presunto infractor⁴, aspectos todos que permiten el desarrollo de dicha potestad de manera transparente, legítima y eficaz.⁵

En cuanto hace a la administración, la filiación de su potestad sancionadora se suele situar en la función de policía que pretende asegurar el orden público y en el poder de policía que, con la finalidad de garantizar el orden público, permite regular el ejercicio de las libertades individuales e imponer sanciones orientadas al cumplimiento de las medidas de policía⁶.

³ C703 de 2010

⁴ En el caso del procedimiento sancionatorio ambiental, la Ley 1333 de 2009, permite presumir el aspecto subjetivo de la infracción, es decir, la culpa o dolo y el presunto infractor tiene la carga de la prueba para desvirtuar dicha presunción.

⁵ C 703 de 2010

⁶ Cfr. Sentencia C-506 de 2002

RESOLUCIÓN No.
18 OCT. 2022

Nº - 1495

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.**

En cualquier caso, el fundamento de la potestad sancionadora de la administración actualmente se encuentra en una pluralidad de disposiciones constitucionales que van desde el señalamiento de los fines del Estado, contemplados en el artículo 2, hasta el establecimiento, en el artículo 209, de los principios que guían la función administrativa y, señaladamente, el de eficacia, pasando por el artículo 29 superior que, al estatuir la aplicación del debido proceso *"a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas"*, reconoce, de modo implícito, que la administración está facultada para imponer sanciones.

Específicamente en materia ambiental, tenemos que la potestad sancionadora de la administración, se encuentra establecida en el artículo 80 de la Constitución Política, al establecer que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, al igual que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

De igual forma tenemos, que en el artículo primero de la Ley 1333 de 2009, dicta que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental está a cargo del Estado y se ejerce para este caso en concreto a través de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece en su artículo 31: *"MEDIDAS COMPENSATORIAS. La imposición de una sanción no exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad."*

Finalmente tenemos que el marco de discrecionalidad con que cuenta la administración, se encuentra limitado a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los principios que irradian el *ius puniendi* del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 son un medio eficaz para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción e incluyendo la carga motiva suficiente y relevante para el caso de estudio.

Que así mismo, la citada Ley en su artículo 40 establece las sanciones en las que se encuentra inmerso, quien resulta responsable de una infracción ambiental, las cuales son:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 4. Demolición de obra a costa del infractor. 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

En cuanto a la finalidad, el derecho administrativo sancionador *"busca garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales"* a cargo de la administración⁷.

Los bienes jurídicos de cuya protección se ocupa el administrativo sancionador se mide a partir del conjunto de competencias o facultades asignadas a la administración para permitirle cumplirlas

⁷ Cfr. Sentencia C-616 de 2002.

RESOLUCIÓN No.
18 OCT. 2022

Nº - 1495

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.**

finalidades que le son propias y, desde luego, las sanciones en el derecho administrativo sancionador, pretenden asegurar el funcionamiento de la administración, el cumplimiento de sus cometidos o sancionar el incumplimiento de los deberes, las prohibiciones o los mandatos previstos.

La infracción administrativa encuentra su fundamento en la protección de los intereses generales y es de interés destacar que las disposiciones expedidas para lograr los fines sociales, *"más que regular prohibiciones, señalan requisitos, obligaciones y deberes para el adecuado funcionamiento del sistema"* y para asegurar así *"la adecuada gestión de los distintos órganos del Estado, a efectos de lograr el cumplimiento de las funciones que les han sido encomendadas"*⁸.

El desconocimiento o violación de este tipo de normas, es el que suele generar la infracción administrativa merecedora de una sanción, cuya imposición *"no significa un sacrificio de principio de legalidad, pues es claro que ha de poderse determinar que una norma específica, clara, concreta, exigía el cumplimiento de determinados requisitos, obligaciones o deberes, para que la administración pueda, en uso del derecho sancionador, imponer una pena por su inobservancia"*⁹.

Siendo así y como lo ha destacado la Corte, *"la exigencia de una clasificación detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico del precepto penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa"*, debiéndose entender, entonces, *"que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un precepto que establece un mandato, una prohibición, y otro que establece que el incumplimiento de éstas, será objeto de sanción"*¹⁰.

Precisamente el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 indica que *constituye infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente que reúna las características allí mencionadas y que también lo es "toda acción u omisión que constituye violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente."*

Tratándose de la imposición de sanciones, se deben señalar las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su tasación y las pruebas que la fundamentan¹¹, determinado la proporcionalidad estudiada como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el respectivo acto.

Se debe tener en cuenta que la sanción cumple una función preventiva general que pretende disuadir a todos aquellos que *"estén próximos a la sanción"* y también al sujeto infractor para que no vuelva a incurrir en las conductas que violan normas ambientales, actos administrativos de la autoridad ambiental competente o causan daños¹².

Finalmente es menester precisar que esta Autoridad acude al ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental porque en el presente caso los medios ordinarios de acción administrativa, tales como el ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental no fueron acatados por el presunto

⁸ C 703 de 2010 y C-564 de 2000

⁹ Ibídem.

¹⁰ Ibídem

¹¹ C-564 de 2000

¹² Cfr. SANTIAGO MUÑOZ MACHADO (Director), *Diccionario. . Ob. cit.* Pág. 1368

Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190

Tels. 669 5278 - 669 4666 - 66 94141

www.cardique.gov.co

Cartagena de Indias D T y C. - Colombia

RESOLUCIÓN No.

Nº - 1495

18 OCT. 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

infractor y por ello fue necesario acudir al mecanismo excepcional de la sanción y de la función de policía administrativa.

En el presente caso, resulta pertinente imponer la sanción de carácter económico, Por incumplir: a) las obligaciones contenidas en el Artículo 2 de la Resolución No 0905 del 13 de agosto de 2012, Resolución No 0696 del 8 de mayo de 2015 y resolución No 163 del 9 de febrero de 2016, que a continuación se desprenden: **1.1.** Actualizar o modificar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución número 1045 de septiembre 26 de 2003, el cual debe guardar armonía y coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal en un término de cuarenta y cinco días hábiles, infringiendo el artículo 2.3.2.5.118 del Decreto 1076 de 2015 en número 3º. **1.2.** Implementar todos los proyectos contemplados en el PGIRS, que a la fecha han debido ser ejecutados, entre ellos, los relacionados con el componente de aprovechamiento, implementar todas las acciones a que haya lugar que conlleven a mejorar la prestación de aseo; definir e Implementar alternativas para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el aseo. **1.3.** Clausurar de manera inmediata de los botaderos ubicados en los diferentes sitios de la cabecera municipal zonas rurales y disponer de estos residuos en un relleno sanitario que tenga licencia ambiental infringiendo el artículo 79 de la C.N y el art 2.3.2. 3.5.15 y ss. del Decreto 1077 de 2015.

Ahora bien, por mandato legal, en el procedimiento sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si este no desvirtúa dichas presunciones será sancionado. Lo cual significa que no se establece una "presunción de responsabilidad" sino una presunción de "culpa" o "dolo" del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situación está, que una vez valorada las pruebas, no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio Ambiental en la cual se puede inferir razonablemente el actuar doloso del MUNICIPIO DE TURBACO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Dentro de este contexto consideramos que el actuar del Municipio investigado se presenta a título de DOLO, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra compuesto por dos piezas una cognitiva, lo cual implica que existe un conocimiento acerca de que se está llevando a cabo una conducta ilegal y sancionable, y otra pieza de tipo volitivo, que consiste en la voluntad que alguien tiene de realizar el mismo.

4. SANCIÓN A IMPONER:

"(...)

Se procede a determinar la sanción administrativa de acuerdo con lo consagrado en la Resolución 2086 de 2010 del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, enmarcado en la guía "Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la normativa ambiental- 2010", en el que se determina lo siguiente:

$$\text{Multa} = B + \left[\left\{ \alpha * i \right\} * \left\{ 1 + A \right\} + Ca \right] * Cs$$

Donde:

RESOLUCIÓN No.

(18 OCT.)
18 OCT. 2022

Nº - 1 4 9 5

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

B = Beneficio ilícito

α = Factor de Temporalidad

i = Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A = Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca = Costos asociados

Cs = Capacidad socioeconómica del infractor

A continuación, se determinará el valor de cada uno de los criterios relacionados en la fórmula anterior.

- BENEFICIO ILÍCITO (B)

Se refiere a la ganancia económica que obtiene el infractor fruto de su conducta.

Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos (y_1), costos evitados (y_2) o ahorros de retrasos (y_3).

El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción con la capacidad de detección de la conducta (p)".

El beneficio ilícito se determina mediante la siguiente relación:

$$B = \frac{Y * (1 - p)}{p}$$

Donde:

B: Beneficio ilícito

Y: Sumatoria de ingresos y costos

Para el cargo mencionado anteriormente se analiza lo siguiente:

Costos evitados y_2

Teniendo en cuenta la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental del año 2010, El concepto de costo evitado dentro de la configuración del beneficio ilícito, se encuentra asociado a la inobservancia de los estándares de operación o de comportamiento por parte del agente, poniendo en riesgo el medio ambiente o efectivamente afectándolo, incentivado por no incurrir en un costo determinado. Es decir, se asocia al esfuerzo no realizado por la empresa.

Los costos evitados pueden clasificarse en tres grupos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010):

Inversiones que debió realizar en capital: Son todos los equipos, infraestructura, instrumentos, mano de obra e insumos, en los cuales el infractor debió destinar un determinado nivel de recursos para el cumplimiento de los planes de manejo o para cumplir las condicionantes legales en materia ambiental para el funcionamiento. En el caso de existir un plan aprobado por una entidad ambiental, se han de proyectar cuáles son los costos en materia de inversiones en que debió incurrir el infractor para cumplirlo.

Mantenimiento de inversiones: Estos costos provienen de la no incursión en mantenimiento de las inversiones de capital (equipos, infraestructura, instrumentos, etc.) que debieron realizarse para el cumplimiento de la norma. Es decir, vigilancia técnica, soporte y monitoreo que debió realizarse para el óptimo funcionamiento de las inversiones.



RESOLUCIÓN No.

18 OCT. 2022

Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Operación de inversiones: Es el costo en el que habría incurrido el infractor por la operación de la inversión (talento humano, insumos, etc.) que debió haber realizado.

Cuando la infracción obedece al incumplimiento de procedimientos administrativos, los costos evitados se calculan a partir de costos asociados al procedimiento administrativo infringido. En estos casos, las Autoridades Ambientales tienen establecidos los costos al público de sus procedimientos administrativos.

Análisis de Costos:

De acuerdo con la documentación obrante en el expediente SA 11709-3, No se permite determinar los costos evitados totales del municipio de Turbaco- Bolívar, por desconocer exactamente el valor para la clausura de los botadores ubicados en los diferentes sitios de la cabecera municipal, zonas rurales y la disposición de estos residuos en un relleno sanitario. Así mismo, no es posible determinar los costos administrativos en presentar la actualización del PGIRS.

$y = 0$

En Tal sentido;

$B =$

$$\frac{y * (1 - p)}{p}$$

$$B = 0 * (1 - 0,5) / 0,5 = 0$$

Si bien se establece lo anterior, no es posible calcular el Beneficio Ilícito obtenido por el infractor, dado que no se cuenta con información completa que permita calcular el costo evitado (y_2), por lo tanto, el valor de este criterio para el cálculo de la multa corresponderá a cero "0", situación que se tendrá en cuenta en las CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES=0,2.

En tal sentido:

$$B = 0$$

$$B = 0$$

- FACTOR DE TEMPORALIDAD (α)

El factor de temporalidad, considera la duración del hecho ilícito. Su cálculo busca determinar el periodo de tiempo en el cual se realizan las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental.

"Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua en el tiempo." (Artículo 2° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010).

Fecha de inicio	9 de febrero de 2012 Fecha en la cual Cardique práctico visita técnica de seguimiento a los programas establecidos en el PGIRS al municipio de Turbaco- Bolívar, detectando la infracción y realizo requerimiento mediante la 0905 de 13 agosto de 2012.
Fecha final	24 de agosto de 2018 Fecha en la cual se formulan los cargos al municipio de Turbaco- Bolívar, por incumplimientos de las obligaciones del PGIRS, el Municipio no presento escrito de descargos evidenciando su incumplimiento.



RESOLUCIÓN No.
18 OCT. 2022 Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Días de infracción	Se presenta de forma continua superando los 365 días, en tal sentido, la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental (MAVDT, 2010) contempla un factor de temporalidad acotado entre 1 y 4, siendo este último valor el correspondiente a una acción sucesiva de 365 días o más, por lo tanto, para el presente caso se tomará como factor de temporalidad el valor de 4.
--------------------	---

Expuesto lo anterior:

$\alpha = 4$

- GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL Y/O EVALUACIÓN DE RIESGO (i)

Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, los cuales determinan la importancia de afectación” (artículo 2° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010).

La calificación se mide con las siguientes variables: La importancia de la afectación se estima mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla de la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), Tabla 6. Identificación y ponderación de atributos para estimar la importancia de la afectación

Atributo	Definición	Calificación	Ponderación
Intensidad (IN)	Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección	Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0 y 33%.	1
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 34% y 66%.	4
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 67% y 99%.	8
		Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma igual o superior o al 100%	12
Extensión (EX)	Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno	Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.	1
		Cuando la afectación incide en un área determinada entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas	4
		Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a cinco (5) hectáreas.	12
Persistencia (PE)	Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción	Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.	1
		Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años.	3
		Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 años	5



RESOLUCIÓN No.
18 OCT. 2022 Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Reversibilidad (RV)	Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.	Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un período menor de 1 año.	1
		Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.	3
		Cuando la afectación es permanente o se supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un plazo superior a diez (10) años.	5
Recuperabilidad (RMCI)	Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.	Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.	1
		Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.	3
		Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acción humana	10

- VALORACIÓN DE AFECTACION AMBIENTAL

La Resolución No. 0905 del 13 de agosto de 2012, Cardique requiere al municipio de Turbaco para que ponga en ejecución e implemente los proyectos contentivos del PGIRS; así mismo, actualice o modifique el PGIRS conforme a lo establece el artículo 11 de la Resolución N2 1045 de 2005, para lo cual tiene un término de 45 días hábiles.

La Resolución N2 0696 de 08 de mayo de 2015, Cardique requiere al municipio de Turbaco respecto a la queja en la Urbanización Catalina.

La Resolución N° 0163 del 22 de febrero de 2016 Cardique requiere al Municipio de Turbaco para que de manera inmediata implementé todos los proyectos contemplados en el PGIRS, que a la fecha han debido ser ejecutados, entre esos, los relacionados con el componente de aprovechamiento; implemente todas las acciones a que haya lugar que conlleven a mejorar la prestación del servicio de aseo; definir e implementar alternativas para el adecuado manejo de los residuos sólidos en el área rural, entre otros requerimientos.

Mediante los Conceptos Técnicos; No. 0780 de 2013, No.333 de 2014, No. 0578 de 2016 No. 042 de 2017, No. 492 de 2018 y No. 559 de 2019 de seguimiento al PGIRS se establecieron que hasta la fecha el municipio de Turbaco- Bolívar, no se evidencia avances significativos en la implementación de los programas contenidos en el PGIRS.

Expuesto lo anterior, el cargo único formulado genera impactos ambientales negativos causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas, son;

RESOLUCIÓN No.

18 OCT. 2022

Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL.

- *Agua: Manejo inadecuado de lixiviados, Probable alteración de las características del recurso hídrico.*

El municipio de Turbaco cuenta con una gran cantidad de fuentes hídricas, como: Arroyo de Matute, Arroyo de Mameyal, Arroyo de Cucumán, los cuales son de vital importancia para las comunidades, ecosistemas interconectados al recursos hídricos y para el desarrollo mismo del municipio. Estas fuentes hídricas pueden verse afectadas en su calidad por el vertimiento directo de los lixiviados generados por la descomposición propia de los residuos sólidos y/o por medio de la escorrentía superficial.

También puede generarse contaminación de aguas freáticas por infiltración de lixiviados. Afectación de la vegetación y especies acuáticas alterando el equilibrio ecológico y las propiedades fisicoquímicas necesarias para la supervivencia de las mimas

Falta de sistemas de drenaje para manejo de aguas lluvias, Probable contaminación de fuentes hídricas por el aumento en la producción de lixiviados y el arrastre de sedimentos.

Disposición de residuos sin cobertura, probables obstrucciones en el flujo normal del agua que pueden ocasionar problemas de inundaciones.

Aire: Manejo inadecuado gases, Probable deterioro calidad de aire por producción de biogás. El mayor potencial de contaminación o impacto ambiental del biogás se origina de los posibles efectos ambientales de sus dos principales componentes (metano y bióxido de carbono), El CH₄ y CO₂, además de ser contaminantes de la atmosfera a nivel local, son además los gases de efecto invernadero más importantes que contribuyen al calentamiento global. Quema de residuos, El problema se agudiza por el riesgo de incendios accidentales en el botadero o cuando se presentan quemas incontroladas en el mismo, debido a que se liberan a la atmosfera gases como el metano y el anhídrido carbónico, generadores del calentamiento global o efecto invernadero, monóxido de carbono (CO), Óxidos de azufre (SO_x), óxidos de nitrógeno (NO_x), metales pesados, así como sustancias toxicas y de persistencia en el ambiente como son las dioxinas y furanos, liberadas al arder productos clorados, en especial los plásticos de cloruro de polivinilo (PVC), humos y material particulado.

Suelo: Disposición de residuos sin contar con sistemas de impermeabilización, posible alteración de las características del suelo por infiltración de lixiviados. Disposición de residuos en sitios no autorizados, cambio de uso del suelo. Los botaderos satélites pueden llegar a localizarse en áreas de importancia ambiental (áreas protegidas o con restricción de uso) afectando los ecosistemas presente. Alteración de la vegetación primaria por la acumulación y disposición inadecuada en zonas verdes de uso público.

Media perceptivo/ paisaje, Disposición de residuos a cielo abierto, Modificación del paisaje e impacto visual.

Salud a la población: Manejo inadecuado de lixiviados- Contaminación de fuentes hídricas, Disposición a cielo abierto, Posible proliferación de enfermedades por consumo de agua no apta o por olores ofensivos alterando el sistema respiratorio en la poblaciones circundantes en ares de botaderos satélites. Disposición de residuos sin cobertura. Quema de residuos, El polvo y residuos ligeros levantados por el viento, pueden ocasionar efectos negativos en la salud de la población por afecciones respiratorias e irritaciones en la mucosa. Además,



RESOLUCIÓN No. **Nº - 1495**
18 OCT. 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL.

pueden llegar a los terrenos de cultivo y caminos cercanos, estorbando la actividad agrícola y el tránsito vehicular.

El municipio de Turbaco- Bolívar, no presentó escrito de descargos, practica de pruebas ni alegatos.

Expuesto lo anterior, se procede a determinar la sanción administrativa con fundamento en Riesgo de afectación ambiental al Municipio de Turbaco- Bolívar por el cargo único formulado.

CARGO ÚNICO: Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 2 de la Resolución No. 0905 del 13 de agosto de 2012, Resolución No 0696 del 8 de mayo de 2015 y Resolución No 163 del 9 de febrero de 2016, que a continuación se desprenden:

- 1.1. *Actualizar o modificar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución número 1045 de septiembre 26 de 2003, el cual debe guardar armonía y coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal en un término de cuarenta y cinco días hábiles, infringiendo el artículo 2.3.2.2.5.118 del Decreto 1076 de 2015 en numeral 3°.*
- 1.2. *Implementar todos los proyectos contemplados en el PGIRS, que a la fecha han debido ser ejecutados, entre ellos, los relacionados con el componente de aprovechamiento; implementar todas las acciones a que haya lugar que conlleven a mejorar la prestación de aseo; definir e implementar- alternativas para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el aseo.*
- 1.3. *Clausurar de manera inmediata de los botaderos ubicados en los diferentes sitios de la cabecera municipal, zonas rurales y disponer de estos residuos en un relleno sanitario que tenga licencia ambiental, infringiendo el artículo 79 de la C.N y el art 2.3.2.3.5.15 y ss. del Decreto 1077 de 2015.*

Cálculo del grado de afectación ambiental			
Intensidad (IN)	Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección	Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 67% y 99%. Mediante Concepto Técnico No. 0578 de 2016, estableció que el municipio de Turbaco de los once (11) proyectos del PGIRS solo se han implementado dos (2) de ellos, lo que corresponde a un 18% de avances. Así mismo, los Conceptos Técnicos por seguimiento No. 042 de 2017 y No. 492 de 2018, establecen que de los proyectos del PGIRS de Turbaco no se tiene evidencias del avance de su implementación y tampoco ha actualizado del PGIRS.	8
Extensión (EX)	Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno	Cuando la afectación incide en un área determinada entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas	4



RESOLUCIÓN No.

18 OCT. 2022

Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Persistencia (PE)	Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción	<p>Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años</p> <p>La existencia de botaderos satelitales impacta negativamente al suelo, agua y aire, debido a la descomposición de los residuos que genera los lixiviados, con una potencia de llegar hasta fuentes de agua alterando sus características Físico-Químicas y con ellos generando posible afectación a la salud de la población que se abastece de ellas. Así mismo, genera gases los cuales van a la atmosfera con potencial de alterar la calidad del aire y generación de olores ofensivos a la población.</p> <p>Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor fracción de residuos en el botadero no son peligrosos, y en gran cantidad corresponden a residuos orgánicos biodegradables, las condiciones climatologías y</p>	3
		precipitaciones favorecen la dilución de sustancias, lo que indica que el efecto no es permanente.	
Reversibilidad (RV)	Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.	<p>Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.</p> <p>Teniendo en cuenta que la mayor fracción de residuos en el botadero no son peligrosos, y en gran cantidad corresponden a residuos orgánicos biodegradables, las condiciones climatologías y precipitaciones tendrán una capacidad de asimilación a corto plazo.</p>	1
Recuperabilidad (MC)	Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental	<p>Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.</p> <p>Teniendo en cuenta que la mayor fracción de residuos en el botadero no son peligrosos, y en gran cantidad corresponden a residuos orgánicos biodegradables, las condiciones climatologías y precipitaciones tendrán una capacidad de recuperación a corto plazo, y una vez se implementen las medidas adecuadas de la ejecución de proyectos del PGIRS.</p>	1
(i) Importancia de la Afectación i= (3*IN)+(2*EX)+PE+RV+MC			37



RESOLUCIÓN No.

()
18 OCT. 2022

Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el cargo único es de tener presente lo dispuesto en el Artículo 8° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, el cual establece que:

“Evaluación del riesgo (r). Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo...”, y el parágrafo del artículo 4° de la Resolución en mención, establece que: “El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación ambiental. De acuerdo a lo anterior se tiene la siguiente calificación para los cargos:

Para la importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

Tabla 5. Importancia de la Afectación

Calificación	Descripción	Medida cualitativa	Rango
Importancia (I)	Medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos	Irrelevante	8
		Leve	9-20
		Moderado	21-40
		Severo	41-60
		Crítico	61-80

Para la estimación de la variable “Evaluación del Riesgo - r”, se desarrolla la ecuación establecida en el Artículo 8° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, siendo la siguiente: $r = o \cdot m$, donde r = Riesgo o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación m = Magnitud potencial de afectación

La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un “escenario con afectación” Una vez obtenido el valor de (I) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla de la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial):

Tabla 10. Evaluación del nivel potencial de impacto

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación	Nivel potencial de impacto
Irrelevante	8	20
Leve	9-20	35
Moderado	21-40	50
Severo	41-60	65
Crítico	61-80	80

Probabilidad de ocurrencia (o)

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de la afectación, el equipo de profesionales de la autoridad ambiental debe evaluar y sustentar la posibilidad de que esta ocurra y de acuerdo con la experticia, se debe sustentar si la probabilidad de ocurrencia del hecho es muy alta, alta, moderada, baja o muy baja. A partir de dicha valoración, se le asigna un valor a la probabilidad de ocurrencia, tal como aparece en la tabla 12.

Tabla 11. Valoración de la probabilidad de ocurrencia



RESOLUCIÓN No.
18 OCT. 2022 Nº - 1 4 9 5

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Prob bilidad de Ocurrencia		
Criterio	Valor de probabilidad de ocurrencia	
Muy Alta	1	
Alta	0,8	
Moderada	0,6	
Baja	0,4	
Muy Baja	0,2	

Expuesto así, se obtiene la siguiente valoración:

Cálculo de Evaluación del Riesgo		Valor
(0) Probabilidad de ocurrencia de la afectación	Mediante las visitas de seguimiento de Cardique a la implementación del PGIRS del municipio de Turbaco- Bolívar, en los Conceptos Técnicos; No. 0780 de 2013, No.333 de 2014, No. 0578 de 2016 No. 042 de 2017, No. 492 de 2018 y No. 559 de 2019 se establecieron que hasta la fecha el municipio de Turbaco- Bolívar, no se evidencia avances significativos en la implementación de los programas contenidos en el PGIRS, no ha clausurado de manera inmediata los botaderos ubicados en los diferentes sitios de la cabecera municipal,	0,6

	zonas rurales, lo que genera el potencial de afectación al ambiente en los recursos; agua, aire, suelo, paisaje y salud. Así mismo, al no presentar una actualización y cronograma de las actividades a corto y mediano plazo a implementar del PGIRS ajustado al Plan de Desarrollo Municipal, se desconoce la evidencia de este cumplimiento de tipo administrativo. Lo que corresponde a una Probabilidad Moderada de Afectación.	
(m) Magnitud potencial de afectación	Presenta un criterio de valoración MODERADO.	50
$r = o \times m = 0,6 \times 50$		30

Cálculo de Evaluación del Riesgo		Valor
(0) Probabilidad de ocurrencia de la afectación	Mediante las visitas de seguimiento de Cardique a la implementación del PGIRS del municipio de Turbaco- Bolívar, en los Conceptos Técnicos; No. 0780 de 2013, No.333 de 2014, No. 0578 de 2016 No. 042 de 2017, No. 492 de 2018 y No. 559 de 2019 se establecieron que hasta la fecha el municipio de Turbaco- Bolívar, no se evidencia avances significativos en la implementación de los programas contenidos en el PGIRS, no ha clausurado de manera inmediata los botaderos ubicados en los diferentes sitios de la cabecera municipal,	0,6

	zonas rurales, lo que genera el potencial de afectación al ambiente en los recursos; agua, aire, suelo, paisaje y salud.	
--	--	--



RESOLUCIÓN No.
18 OCT. 2022 Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

	Así mismo, al no presentar una actualización y cronograma de las actividades a corto y mediano plazo a implementar del PGIRS ajustado al Plan de Desarrollo Municipal, se desconoce la evidencia de este cumplimiento de tipo administrativo.	
	Lo que corresponde a una Probabilidad Moderada de Afectación.	
(m) Magnitud potencial de afectación	Presenta un criterio de valoración MODERADO.	50
$r = 0 \times m = 0,6 \times 50$		30

-VALOR MONETARIO DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

El procedimiento para el cálculo se basa en lo establecido en el artículo 8° de la Resolución MAV. 2086 de 2010.

$$R = (11.03 \times smml/v) \times r$$

$$R = (11.03 \times \$ 566.700) \times 30$$

$$R = \$187.521.030,00$$

(A) CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor que hacen parte los antecedentes y pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relación el tema, así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que realiza al cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores. Las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 del 21 de julio 2009". (Artículo 2° de la Resolución MAV 2086 de 2010).

AGRAVANTES	OBSERVACIONES	VALOR
Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.	Se consultó el expediente del Municipio de Turbaco - Bolívar, y se detectó que mediante, Resolución 845 de 1 de agosto de 2007, Cardique sanciona al municipio por la presunta violación de las normas ambientales vigentes, y ordeno dar cumplimiento a las siguientes obligaciones; <ul style="list-style-type: none">Cerrar los botaderos satélites donde se están depositando los residuos sólidos.Asumir la responsabilidad de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en el municipio y generar mecanismos para que el servicio sea eficiente.	0,2
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.	Circunstancia valorada en la importancia de la afectación.	0
Cometer la infracción para ocultar otra.		0
Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.		0



RESOLUCIÓN No.
18 OCT. 2022

Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta		Circunstancia valorada en la importancia de la afectación
Atentar contra recursos naturales ubicados en área protegidas, o declaradas en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.		0
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica		0
Obtener provecho económico para sí o para un tercero.	Debido a que el que el beneficio ilícito no pudo ser calculado se determina esta circunstancia agravante.	0.2
Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.		0
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas		0
Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida.		0
Las infracciones que involucren residuos peligrosos.		0
Total, Escenarios= 2		0,4
ATENUANTES	OBSERVACIONES	VALOR
Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.		0
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor		0



RESOLUCIÓN No.
(18 OCT) 2022

Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana.	Circunstancia valorada en la importancia de la afectación potencial	0
Total, Escenarios= 0		0

De acuerdo con lo anterior, para el presente caso se considera dos (2) circunstancia agravante y ninguna atenuante.

$A = \sum \text{Agravantes} + \text{Atenuantes}$

$A = 0,4$

(Ca)COSTOS ASOCIADOS

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la ley 1333 de 2009" (artículo 11° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010).

En sentido del cargo único impuesto, no incurren en costos asociados conforme lo establece el Artículo 11 de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, por lo tanto, para el cálculo de la multa el costo asociado tendrá un valor de cero "0".

$Ca = 0$

(Cs) CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL PRESUNTO INFRACTOR.

Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria". (Artículo 2° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010).

Entes territorial: El infractor es el municipio Turbaco- Bolívar, el cual se encuentra en la quinta (5) categoría de acuerdo a la Unidad Administrativa Especial Contaduría General De La Nación, desde el año 2013 mediante la Resolución 705 de 30/11/2013 hasta la última Resolución Nº 400 del 29 noviembre de 2019 "Por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) conforme a lo dispuesto en las Leyes 136 de

213613335, BOLÍVAR, TURBACO, 103.166, 18.077.066, 11.450.900, 61,34%, 5

1994, 617 de 2000 y decreto 2106 de 2019". A continuación, se muestra la imagen de la información;

Teniendo en cuenta Tabla 19. Categoría vs capacidad socioeconómica de los municipios de la "Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental 2010" se estiman las siguientes ponderaciones:

Tabla 19. Categoría vs capacidad socioeconómica de los municipios

Para Municipios		
Categoría	Factor ponderador	Capacidad de pago
Especial		1
Primera		0.9
Segunda		0.8
Tercera		0.7
Cuarta		0.6
Quinta		0.5
Sexta		0.4

RESOLUCIÓN No.

18 OCT. 2022

Nº - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

Por los tanto, el factor de ponderación equivale a 0,5.

Cs= 0,5

TASACIÓN DE LA MULTA

Teniendo en cuenta los criterios para la tasación de la multa se procede a calcular el modelo matemático conforme a lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución MAVDT 2086 de 2010:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * i) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

Donde:

B = Beneficio Ilícito

α = Temporalidad

i = Grado de afectación y/o evaluación de riesgo

A = Agravantes – Atenuantes

Ca = Costos asociados

Cs = Capacidad Socioeconómica

Reemplazando en la ecuación obtendremos la tasación de la multa:

$$\text{MULTA} = 0 + [(4 * 187.521.030) * (1 + 0,4) + 0] * 0,5$$

MULTA= SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. \$525.058.884,⁰⁰ Equivalente aproximadamente a 13815,88 UVT

"Por disposición del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, "Plan Nacional Desarrollo 2018- 2022" Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", el cálculo se debe hacer en UVT. 23 La UVT, para el año 2022, tiene un valor de 38.004UVT"

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable de los cargos formulados mediante Resolución 1083 del 24 de agosto de 2018, al Municipio de Turbaco, representado legalmente por el Dr. GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUETER, o quien haga sus veces al momento de la notificación de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al Municipio de Turbaco, representado legalmente por el Dr. GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUETER sanción de multa de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. \$525.058.884,⁰⁰ Equivalente aproximadamente a 13815,88 UVT "Por disposición del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, "Plan Nacional Desarrollo 2018- 2022" Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", el cálculo se debe hacer en UVT. 23 La UVT, para el año 2022, tiene un valor de 38.004UVT"

Parágrafo primero. - El valor de la multa impuesta en la presente Resolución, deberá ser cancelada mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, identificado con el N.I.T. 800.254.453-5, en la Cuenta Corriente No. 830969671 del Banco de Occidente, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, so pena de ejercer las acciones de cobro correspondientes.

RESOLUCIÓN No.

18 OCT. 2022

No - 1495

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
DE CARÁCTER AMBIENTAL.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución presta merito ejecutivo, a través de la oficina de cobro coactivo de esta entidad y se procederá al cobro de los intereses legales, una vez vencido el término que se ha señalado y no se ha efectuado el pago.

ARTÍCULO CUARTO: La sanción impuesta mediante el presente acto administrativo no exime al infractor del cumplimiento de las normas, sobre protección ambiental o manejo de los recursos naturales renovables, como tampoco del trámite respectivo de permisos, autorizaciones y/o licencias ante las autoridades pertinentes de acuerdo a lo estipulado en la normativa ambiental vigente y del cumplimiento de los actos administrativos emanados por esta entidad; además, deberá abstenerse de realizar cualquier actividad extractiva de minerales sin contar con los permisos y/o licencia exigidos para ello.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al Municipio de Turbaco, representado legalmente por el Dr. GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUETER al correo electrónico: contactenos@turbaco-bolivar.gov.co

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, y a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y fines pertinentes al correo electrónico: mchamorro@procuraduria.gov.co.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental para su control y seguimiento al correo electrónico: subdireccionga@cardique.gov.co

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo deberá publicarse en la página web de CARDIQUE, una vez se surtan las respectivas notificaciones (artículo 71, ley 99 de 1993).

ARTÍCULO NOVENO: Ordenar la inscripción de la sanción que se impone mediante el presente acto administrativo una vez se encuentre ejecutoriado, en el Registro único de Infractores Ambientales – RUIA- al correo sancionatorio@cardique.gov.co.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

18 OCT. 2022

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General

Exp: SA 11709-3

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jemima E. Barreto Pájaro	Contratista	
Revisó y Aprobó	Albelro Morales Ordoñez	Jefa Oficina de Control Interno Disc y Sanc Ambiental	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			